



Política Gremial

Contexto Internacional

Vivimos en un mundo unipolar capitalista, hegemonizado por Estados Unidos y sus agentes económicos: el FMI, Banco Mundial y Organización Mundial de Comercio atravesados por una profunda crisis estructural y coyuntural. Sin adherir a la visión mecanicista del autoderrumbe se mantienen los indicadores que se plantearon a fines del 2007, la importancia del quiebre y su difícil resolución para el bloque de poder: Estados Unidos pasa por un momento hiper crítico, tanto en el plano interno como externo, al conflicto del sistema hipotecario del año pasado se sumó el desplome del sistema financiero, que llevó a la mayor crisis económica después de la del 30, fruto de las burbujas especulativas generadas por el problema de la sobreproducción.

La solución de coyuntura que presenta el imperio, no resuelve lo estructural, en realidad consiste en el salvataje económico, o sea la protección del Estado a varios grupos financieros concentrados. Esta intervención no deja de ser neoliberal porque es para proteger al gran capital y superar desequilibrios económicos. El imperio a través del FMI, siempre cuestionó y actuó en consecuencia para evitar que el Estado intervenga para proteger a las clases populares, pero lo hacen para la clase dominante, es decir para permitirles mantener el “status quo” y seguir concentrando el poder.

A su vez, la discusión del salvataje en el Congreso Norteamericano se realiza en marco de la disputa electoral entre Republicanos y Demócratas que finalmente aprobaron el proyecto demostrando, una vez más, que no son tan diferentes. De hecho, creer que Barack Obama marcará un cambio significativo para las relaciones económicas con Latinoamérica puede significar un acto de ingenuidad política.

Respecto de su política exterior, cada vez es más complicada en Medio Oriente, el imperialismo yanqui y sus socios continúan perdiendo el control sobre Irak, Afganistán y Pakistán, y encuentran cierto freno a su expansión ilimitada por diversos bloques regionales comerciales en el centro y la periferia, sumado a la competencia económica con Japón y las llamadas nuevas potencias del Siglo XXI.

Se mantiene, además, la fuerte presión de la OPEP, encabezada por Venezuela para que el petróleo deje de pagarse en dólares, lo que profundiza la crisis económica y financiera del país del norte.

En Latinoamérica es casi un hecho la consolidación de la propuesta del ALBA, que ha crecido en cantidad de miembros con el ingreso de Nicaragua y existe la posibilidad de que haga lo mismo Paraguay. En este país, el triunfo de Lugo ha generado expectativas de cambio en las clases populares.

Es importante el avance continuo de los movimientos sociales en la disputa de espacios de poder. De manera paralela, los gobiernos toman definiciones políticas, con fuertes rasgos antiimperialistas y de



transformación social. Aquí, la discusión va más allá de la negación de las políticas neoliberales porque se plantea el debate sobre el significado y la construcción del socialismo del Siglo XXI, esto sucede con más fuerza en Venezuela, Ecuador y Bolivia.

El gobierno de Hugo Chávez orientó la economía venezolana con medidas redistribucionistas. En Ecuador, la reforma constitucional que intenta impulsar Rafael Correa plantea la recuperación histórica de espacios para movimientos sociales y un nuevo diseño de políticas de propiedad de la tierra y sus bienes. En Bolivia, el triunfo del gobierno de Evo Morales en el referéndum ha demostrado que el pueblo legitima los cambios propuestos.

Frente a esta serie de transformaciones, en particular en el caso Boliviano, existe una fuerte resistencia por parte del imperio y las clases dominantes locales. Hay una reorganización de la derecha neoliberal y fascista que intenta reagruparse y cobrar fuerza en toda la región y que también existe en nuestro país, aunque en algunos casos cuenten con aliados que vienen del campo popular.

Estos grupos van mutando y cooptando adeptos, en algunos casos con presiones desestabilizadoras como las intentonas golpistas en Ecuador y Venezuela, mientras que en Bolivia se dan concretamente actos golpistas en los que se traslucen un profundo odio racista que provoca nuevos genocidios como lo sucedido en la provincia de Pando.

Este accionar de los grupos locales más reaccionarios sin duda, cuentan con el aval y el apoyo logístico de Estados Unidos, de hecho algunos analistas plantean que se quiere implementar el “modelo Kosovo” en la región. Este avasallamiento de la soberanía de los pueblos ya ha sido probado en Haití, El Salvador y Colombia las consecuencias están a la vista, por lo que debe ser denunciado y repudiado, a la vez que los pueblos hermanos deben articular políticas a través de sus gobiernos para que se garanticen los procesos democráticos en Latinoamérica.

Para el conjunto, debe quedar claro que defenderse contra el golpe en Bolivia es defenderse contra los intentos de avance de la derecha golpista en todo el continente.

También en Europa se evidencian conflictos y luchas sociales, fundamentalmente por el aumento de la precarización de las condiciones laborales, que golpea a los trabajadores, en su mayoría inmigrantes. La aplicación de políticas neoliberales y el problema de los inmigrantes ya no es coyuntural si no estructural, esto incrementa las luchas sociales no sólo de los trabajadores precarizados si no también de los trabajadores tradicionales que trae como consecuencia un resurgimiento de la presencia sindical a la hora de impulsarlos o de las exigencia de soluciones. Esta claro que el avance de la derecha europea va generando de a poco modelos de resistencia cuyos mayores referentes son parte de las clases que durante años formó parte de la ciudadanía de segunda clase que sostuvo la economía del primer mundo, estos movimientos aún se encuentran fragmentados, dependerá de cómo logren organizarse la historia futura de la Unión Europea y sus países satélites.



Contexto Nacional

A nivel nacional, el 2008 quedará en los anales de la historia política como un año marcado por los 100 días en los que el país estuvo en debate por las retenciones y las acciones implementadas a posteriori, fundamentalmente, porque en los diferentes posicionamientos que se generaron se puede leer entre líneas, el modelo de país que cada grupo pone en disputa, en el que lo económico atraviesa lo social sin medias tintas.

El posicionamiento de UnTER a favor de las retenciones fue producto de la línea ideológica que tiene el sindicato desde su creación, en la que se traza un modelo social con justicia, solidario y sin exclusión. Por consiguiente, entendemos que el Estado debe intervenir y avanzar en pos de una verdadera reforma tributaria sobre la renta extraordinaria de los grupos más concentrados de capital agrícola-ganadero, minería, petróleo, la rueda financiera, entre otros, de la misma manera en que debe aliviar los gravámenes sobre los sectores más castigados.

Advertimos también, que no es lo mismo acumulación que distribución, por consiguiente, el verdadero desafío es lograr una equitativa redistribución de la riqueza, que nos permita al conjunto de trabajadores/as volver a tener el 50% de la rentabilidad de lo producido por el país, tal como ocurrió en décadas pasadas. Y para esto hay que modificar el modelo productivo.

La discusión de la implementación o no de la Resolución 125, puso al descubierto también lo endeble del discurso de algunos sectores, que desde lo declamativo, decían encolumnarse en el sector nacional y popular pero que, al momento de definirse, terminaron posicionados detrás de las banderas de la derecha mutante disfrazada de campesina. Esto puede ser una evidencia de cierta ingenuidad política de algunos grupos que imbuidos de un sectarismo feroz, aún no logran visibilizar quién es el verdadero enemigo, como también devela que existen discusiones al interior de la militancia que aún no han sido saldadas.

Durante el primer año de la gestión de Cristina Fernández se puede reconocer como positivo que se mantuviera la política de recuperación de la memoria reciente y la continuidad de los juicios por delitos de lesa humanidad que permitió enviar a cárcel común a genocidas como Luciano Benjamín Menéndez o Antonio Bussi, aún cuando quede pendiente la batalla por lograr que este último termine sus días en un calabozo y no en su casa. Sin embargo, no se puede olvidar en este plano de las libertades democráticas que todavía Jorge Julio López está desaparecido, y por lo tanto se debe continuar exigiendo acciones claras que permitan encontrarlo y castigar a los responsables ideológicos y materiales de su secuestro.

Por otra parte, el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que legitima la representación gremial de los delegados de gremios sin personería jurídica, evidencia junto a otros fallos, que esta Corte es independiente y plantea criterios de democratización de las instituciones que obliga a abrir nuevas instancias de debate y, en consecuencia, democratiza los espacios de representatividad.



Durante el segundo semestre, desde el gobierno se fueron planteando propuestas que, de concretarse permitirían avanzar en el ejercicio de la soberanía política y económica como por ejemplo, el proyecto de reestatización de Aerolíneas o el fin de las AFJP. Medidas que se contraponen claramente a lo vivido en los 90. Sin embargo, si el mismo gobierno no asume su responsabilidad por no haber impedido el vaciamiento de las empresas o continúa desoyendo los cuestionamientos sobre el accionar de alguno de sus funcionarios, estas medidas perderán efecto y credibilidad.

El actual panorama de crisis financiera internacional, obliga a tomar medidas más contundentes si se quiere proteger al sector de los trabajadores/as, para recuperar el mercado interno y permitir que las economías regionales se transformen en generadoras de pleno empleo. Hay que ir más allá de lo discursivo, plantear un plan integral de recuperación de la producción e instalar definitivamente la necesidad de construir consenso real para sostener medidas que jaquean el modelo vigente de concentración.

A través de los medios masivos, en los pasillos y en las diferentes cámaras legislativas es posible escuchar algunos debates interesantes, palabras como desigualdad, pobreza, distribución de la riqueza, aumentos de salarios, más presupuesto para salud y educación, control estatal de la renta petrolera, gasífera, minera, están presentes en los diferentes alegatos, pero no son determinantes a la hora de definir políticas públicas orientadas a contrarrestarla.

No es casual que ahora el tema de la inseguridad agite las aguas, ocupe las páginas de diarios y las pantallas de televisión, porque se juega con la inmediatez y el malestar del medio pelo nacional, tan bien descrito por Jauretche que se deja seducir por la solución facilista de la expulsión social sin profundizar las verdaderas causas y sin visualizar que los verdaderos responsables del debacle económico de décadas anteriores hoy se erigen como defensores acérrimos de la sociedad civil y priorizan el derecho a la propiedad privada por encima de cualquier otro.

Tampoco ayuda al análisis la continuidad en la manipulación de información en el INDEC, ni la dilatación de la discusión por una democratización de los medios de comunicación, porque por un lado la sociedad no puede creer en los números del costo de vida del gobierno y por otro, le otorga legitimidad a estudios tendenciosos de periodistas que responden a sus patrones, quienes, a su vez, son socios o parte de la clase dominante, vale plantearse en un juego de palabras si la opinión pública tiene real conciencia de cuanto influye en ella la opinión privada.

Por otra parte, la oposición va pendulando entre representantes mesiánicos y atildados gerentes del poder económico, articulando alianzas esquizofrénicas que mientras se van licuando en sus propias contradicciones, ahondan el vacío de los partidos políticos, mientras se mantiene la desigualdad y la pobreza entre quienes se arrojan a representar.

En este marco, los sindicatos y las organizaciones sociales tenemos que jugar un rol más activo, plantear los verdaderos debates que exijan cambios estructurales y una real redistribución de la riqueza. Debemos



ocupar espacios de discusión y de definición con el objetivo de seguir intentando un verdadero cambio de la política. Si esto no sucede, será entonces, el conjunto del pueblo trabajador quien persistirá en la lucha por la justa distribución de la riqueza y por una verdadera justicia social frente a un gobierno que cruzó la delgada línea del centro y desistiendo de sus principios ideológicos y fundacionales opte por profundizar la brecha entre el Estado, su responsabilidad y el pueblo.

Contexto Provincial

En la provincia, las consecuencias del resultado electoral del 20 de mayo de 2007 siguieron resonando durante el 2008, tal como lo preveíamos en el análisis de la política gremial, el oficialismo se posicionó a partir de los resultados de la votación por la gobernación que les resultaron favorables sin que esto significara realmente la legitimación de un proyecto político, sino el resultado de las variables sociales y económicas del momento.

Independientemente de los resultados de otras instancias eleccionarias, el reparto de poder permitía entrever algunas alternativas de control de la gestión, sin embargo, nuevamente la escasa visión de conjunto de algunos actores rápidamente ayudó a nivelar el mapa político provincial a favor del radicalismo y sus ocasionales aliados. A esto se le sumó el resultado electoral de las municipales de Bariloche, asumido como un triunfo por el gobierno, porque le permitió recuperar poder, luego de varios resultados adversos, en una de las ciudades más importantes.

En el transcurso de los meses, la realidad político partidaria se fue constituyendo a partir de una sucesión de cambios en las alianzas originales, en uno y en otro sector, la situación planteada por el conflicto provocada por los popes de la revolución campestre también definió la división de aguas, incluso hacia dentro del gabinete provincial. Saiz, mantuvo su oportuna alianza con el gobierno nacional y esto le permitió mantener un margen de movilidad frente a las críticas cruzadas de la propia tropa y de la oposición.

Sin embargo, el hecho que Río Negro sea una de las pocas provincias, sino la única, en la que la “Concertación” parece mantenerse pese al voto “no positivo” de Cobos lo hace gracias al permanente lobby que hacen sus representantes en esferas del gobierno nacional, lo que tiene su costo para ambas partes. Para el gobierno nacional, pretender ignorar los continuos reclamos de sus adherentes respecto de la situación de la provincia, con el solo objeto de sostener su caprichoso andamiaje de alianzas, puede volverse un factor de riesgo que le signifique la pérdida de apoyos importantes y el retiro del voto de electores que no logran entender esta sociedad contra natura, voto que tal vez no resulte significativo en las elecciones del 2009, pero sí en años posteriores.

Para Saiz, mantener esta alianza puede servirle a él y sus más fieles obsecuentes, pero ha generado quiebres dentro de su propio gabinete, que con la ayuda de ex aliados pueden profundizarse a la hora de disputar espacios de poder, que nadie quiere abandonar, luego de más de 20 años de usufructuar el gobierno. Si bien estas peleas mediáticas pueden ser más de lo mismo, siguiendo la tradición de medir fuerzas en tiempos pre-eleccionarios para después terminar cerrando filas, se percibe que no todos los que se van quedando fuera del reparto están dispuestos a ceder fácilmente sus espacios.

El ejemplo más claro de esto, es el escándalo por la distribución de alimentos en mal estado para comedores escolares, comunitarios y las ayudas sociales. Situación que desde UnTER venimos



denunciando desde hace años, cuando la distribución estaba a cargo de la empresa Massily y que hoy, obliga al propio Saiz a salir a sostener a dos funcionarios reconocidos por su ineptitud como son el de Familia Alfredo Pega y de Salud Cristina Uría, pese a las continuas denuncias que se realizan desde los más variados sectores de educación, salud, legislativos e, incluso de defensa de los derechos como lo es el Observatorio de Derechos Humanos de Río Negro.

En todos los sectores en los que el Estado debe proteger y garantizar los derechos de la ciudadanía el de Río Negro se encuentra en déficit, sin embargo, resulta muy difícil consolidar estrategias para modificar esta situación, por un lado la telaraña que han sabido tejer los operadores políticos del radicalismo en todos los estamentos, la escasa presencia de organismos de control confiables y una política clientelar sostenida por más de dos décadas hacen que cualquier intento de confrontación naufrague si se hace sectorialmente.

Igual que en el resto del país, las estructuras partidarias no terminan de ser creíbles. En consecuencia, también aquí los sindicatos y las organizaciones sociales tenemos que jugar un rol más activo, unificar criterios de lucha en el marco de la CTA y con los sectores que padecen la ausencia de políticas públicas integrales. En este sentido, la disputa por revertir la situación de permanente crisis del IPROSS y la exigencia de una verdadera democratización dentro de nuestra Obra Social para que realmente responda a las necesidades de atención a la salud del conjunto de las y los trabajadores

En el plano salarial, el incremento del costo de vida, producto primero de la especulación de sectores formadores de precios y ahora por los embates de la crisis financiera internacional, que también sirve de excusa tanto para el alza de costos, como para negar cualquier posibilidad de aumento en los sueldos, se va haciendo sentir en la sociedad.

Para las familias de las y los trabajadores de la educación la suba inflacionaria ha provocado que se desdibujen los avances logrados en nuestras luchas por la continuidad de la recomposición del salario. Es por ello que al momento de resolver, en el segundo semestre del 2008, la continuidad de nuestras demandas se mantuviera la firmeza que al inicio del ciclo, endureciendo el tenor de las presentaciones de reclamos en distintos ámbitos del Poder Ejecutivo Provincial e inclusive Nacional, por el accionar unilateral del gobierno de desconocer el Acta Paritaria del 13 de marzo, aceptada con condicionamientos por la mayoría de un Congreso Extraordinario de la organización.

Una vez agotada la instancia política, la lucha continúa, fortaleciendo la participación en el diseño de estrategias para dar la pelea en todo los ámbitos por incumplimiento de los acuerdos paritarios firmados y homologados, nos mantendremos alerta, a la espera de respuestas en el ámbito judicial, de todas las presentaciones realizadas, además del pedido de no descuento de los días de paro presentada por el gremio meses antes.

La respuesta del Ministerio continúa siendo el silencio, mientras sigue articulando estrategias orientadas a quebrar a la organización, generando las diferencias dentro del sistema, para ello impulsa convocatorias individuales, y da respuestas acotadas a reclamos legítimos pero sectorizados. Ya intentó avanzar con esta metodología con la movilidad, entrevistándose con los involucrados por sectores, desconociendo la organización gremial y al ámbito de negociación paritario.

De la misma manera, planteó la continuidad de la reforma para la educación secundaria impulsando que cada escuela decidiera al respecto, mientras que desde la organización se continuaba exigiendo la universalidad en la implementación, discutiendo los puntos planteados en el Congreso de Huelgo, en el



que se definió la necesidad de continuar discutiendo los aspectos referidos a condiciones de estabilidad laboral, la estructura y el proceso de evaluación.

Está claro que la lucha por la recomposición salarial será clave durante el próximo período, en el que debemos construir los nuevos ejes: un básico acorde al costo de vida actual, conformando un salario inicial que está acorde al promedio de los salarios de la Patagonia. En primera instancia, es preciso lograr la reapertura del ámbito paritario, pero lo salarial no será el único eje a debatir, seguimos exigiendo que desde el Ministerio se reconozca y respete al Cuerpo Colegiado y urge la revisión de normativa docente modificada de manera unilateral por parte de vocales gubernamentales que desconocen fundamentalmente, los derechos de atención a la salud de trabajadores y sus familias, acotando el otorgamiento de licencias y las condiciones de acceso a los cargos docentes que en algunas localidades ha permitido todo tipo de arbitrariedades.

Ahora bien, hablar de recomposición salarial, también implica poner en discusión otros ejes indispensables para exigir la vigencia de las leyes que garantizan la estabilidad y ampliar la discusión con el objetivo de definir las condiciones laborales de los y las docentes. En este punto, por ejemplo, desde la organización ya se está avanzando en encuentro provinciales de discusión y análisis del nomenclador, debemos completar este proceso que permitirá revertir situaciones de injusticia en aquellos cargos que quedaron desfasados, revisar la cantidad de puntos respecto de roles y funciones en otros, con el objetivo de elaborar una propuesta superadora para el conjunto.

Con el mismo criterio de trabajo, manteniendo una mirada integral, sostenemos la necesidad de mantener la lucha por un mayor presupuesto educativo, exigiendo intervenir en el control de la redistribución de los recursos, para que cualquier ingreso llegue efectivamente a la comunidad educativa y no quede en manos de personeros e intermediarios de turno.

Es con esa misma mirada integradora que estamos planteando también la disputa por la justa distribución de los conocimientos, porque de nada servirán nuestros logros salariales, si en los espacios donde se construyen los conocimientos se pierde. Las consecuencias de las políticas neoliberales están presentes en el trabajo cotidiano dentro de las escuelas, inmersas en un contexto social-económico donde crece la pobreza, la corrupción generalizada, la violencia, el deterioro ambiental, la impunidad y el olvido. Esta realidad agudiza la discriminación e intolerancia que precarizan la convivencia y deterioran el vínculo social.

Frente al vértigo de los cambios sociales y la permanente mutación del modelo de exclusión nuestra práctica no puede, ni debe ser neutral. El desafío sigue siendo resignificar y apropiarnos de las palabras de Paulo Freire "*toda educación es, además de un acto pedagógico, un acto político*", de manera tal que no queden en la mera declaración de principios y al margen de compromisos socio-históricos concretos.

Con este objetivo iniciamos el proceso de discutir el currículum para el nivel primario, que desarrolle una cultura participativa y democrática, que permita la apropiación de saberes y conocimientos de quienes participan del proceso de aprendizaje, profundizando la concepción de sujetos políticos, portadores de derechos que asumen el desafío de la educación como un proceso de transformación social.

Hablamos de democratizar la escuela, romper con el modelo hegemónico en el que hoy pesan demasiado los modelos ciudadanos sustentados en doctrinas individualistas más que colectivas, en proyectos personales más que comunitarios, el principio de ciudadanía pasiva al de ciudadanía activa. Hemos



asumido el desafío de permitirnos ir definiendo colectivamente el para qué enseñar a través de una currícula donde se trabajen las herramientas instrumentales y simbólicas necesarias para desarrollarse en la sociedad permitiendo romper con la exclusión.

Y como nos asumimos desde nuestra concepción como trabajadores y trabajadoras de la educación, es que también nos permitimos repensar nuestra propia organización y definimos iniciar el proceso de analizar y debatir algunos artículos de nuestro Estatuto con la convicción de que es necesario fortalecer el modelo sindical al que adherimos y que requiere de una estructura orgánica que permita desarrollar las acciones políticas que vamos definiendo y que implican un avance en el área de Salud en la Escuela, en las acciones de promoción, defensa y difusión de los derechos humanos, en la necesidad de ampliar la perspectiva de la formación político gremial, entre otros aspectos.

El desafío para el próximo año entonces es profundizar nuestra lucha en defensa de la escuela pública, popular y democrática, que permita construir una sociedad solidaria con justicia social y sin exclusión. Como así también seguir confrontando con cualquier política que signifique flexibilización laboral y cualquier intento de municipalizar el servicio educativo, oponiéndonos a la precariedad laboral que se genera en los proyectos de escuelas de jornada extendida y en los planes de mejoramiento y de retención de alumnos

Esta lucha, la debemos llevar adelante de la misma manera que lo hicimos hasta ahora, con los espacios abiertos al debate e intercambio de ideas con el conjunto de trabajadoras y trabajadores, en los congresos, en el trabajo por comisiones, en las asambleas, en la calle, con el mismo compromiso militante que ha mantenido en pie a la UnTER durante casi 35 años, como un sindicato independiente de cualquier estructura partidaria o poder económico imperante.

Y porque durante más de tres décadas, como sindicato hemos sido parte de la historia provincial, protagonistas de la resistencia a cualquier modelo de exclusión sabemos que vivimos un tiempo que demanda construir una mirada común, compartida y compleja con el objetivo de fortalecer el "nosotros" colectivo, consolidando en el ejercicio de la memoria para apropiarnos del presente y proyectar la sociedad que soñamos. Desafío que asumimos, en perfecta sintonía con nuestros principios fundacionales y que definen nuestra identidad. Desafío que a veces, para que negarlo, puede generar temor, pero vale recordar a Eduardo Galeano"*(...)De los miedos nacen los corajes; y de las dudas, las certezas. Los sueños anuncian otra realidad posible y los delirios, otra razón. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos, para cambiar lo que somos. La identidad no es una pieza de museo, quietecita en la vitrina, sino la siempre asombrosa síntesis de las contradicciones nuestras de cada día. Que nos permite seguir creciendo*".

Temas a Trabajar:

1. Construir con CTERA la definición de: la educación pública, laica y gratuita como un derecho social.
2. Continuar con la lucha política por el aumento del Presupuesto Educativo Provincial y el control de su distribución, sosteniendo como eje la sancionada Ley de Financiamiento Integral de la Educación.
3. Reclamar a los gobiernos provincial y nacional una verdadera inversión educativa. Impulsar acciones de difusión y movilización para que el Presupuesto Educativo provincial se calcule de



Rentas Generales en su totalidad y no del sobrante luego de restar la deuda, tal cual lo determina la Constitución y la Ley 2444.

4. Participar como CTA de todos los reclamos inherentes a los trabajadores.
5. Priorizar el ámbito paritario como espacio para el abordaje, tratamiento y resolución de las condiciones laborales y salariales de trabajadoras y trabajadores de la Educación. Denunciar y elaborar estrategias para rechazar políticas que apunten a la flexibilización y precarización laboral.
6. Continuar con la lucha política por la recuperación y recomposición del salarios.
7. Sostener una política que incluya a la comunidad educativa en cualquier acción que emprendamos.
8. Promover, participar y/o coordinar actividades en el campo comunitario y cultural.
9. Trabajar para fortalecer un sindicato democrático, participativo, solidario y movilizad.
10. Acordar el espacio y los mecanismos para la reforma parcial del estatuto de la organización en virtud del fortalecimiento del modelo sindical que se pretende llevar adelante.
11. Revalorizar el Plenario de Secretarías/os Generales como ámbito de discusión de los lineamientos políticos.
12. Revalorizar el cuerpo de delegados y propiciar su capacitación política y formación sindical.
13. Propiciar el espacio gremial dentro de las Jornadas Institucionales (Acuerdo Paritario Res. N° 146/94) para fortalecer y enriquecer el debate sobre políticas educativas y gremiales.
14. Exigir el funcionamiento pleno del cuerpo colegiado del CPE.
15. Realizar encuentros permanentes entre el Consejo Directivo Central y los/as representantes gremiales en el CPE, con el objeto de que se trasladen y fortalezcan en sus acciones los lineamientos de la política gremial acordados por la organización.
16. Exigir que el Consejo conforme la comisión permanente de Títulos con representación gremial y reglamente su funcionamiento.
17. Propiciar la reglamentación de la Ley 2444 en forma integral.
18. Ratificar la necesidad de reforma del Nivel Medio, tomando como ejes lo resuelto en el marco de la Organización.
19. Continuar propiciando espacios de debate en relación a los diseños curriculares, implementación y estructura de los niveles Inicial y Primaria y sus respectivas modalidades.
20. Impulsar la creación de la Escuela de Capacitación Pedagógica Sindical de UnTER con el fin de formar y fortalecer cuadros militantes en políticas educativas y gremiales.
21. Promover relaciones con la Escuela Marina Vilte y otras entidades de formación sindical de base de CTERA para el fortalecimiento en capacitación pedagógica sindical y sensibilización docente respecto de políticas de Derechos Humanos desde una perspectiva integral.
22. Exigir la capacitación en servicio, la formación y la actualización docente continua para todos los niveles y modalidades, como así también las certificaciones correspondientes en tiempo y forma.
23. Exigir al CPE políticas públicas educativas para la prevención y el abordaje de problemáticas pedagógicas y sociales (fracaso, deserción, violencia en la escuela), con la participación activa del sindicato.
24. Propiciar encuentros con representantes docentes de todos los niveles y modalidades a fin de analizar, reflexionar y debatir sobre la normativa vigente e impulsar desde los marcos orgánicos del sindicato ante los ámbitos legítimamente convalidados, anteproyectos que respondan a las necesidades reales del sistema educativo (Res. 1080/91, 100/95, 1233/92, 1700/91, Decreto 1095/92, entre otras).
25. Exigir la continuidad en la realización de los concursos anuales de ingreso a la docencia, hasta completar todos los llamados.



26. Exigir la convocatoria y realización de los concursos de ascenso por antecedentes y oposición para los cargos de conducción y supervisión de todos los niveles y modalidades, incluyendo el de sumariantes de la Junta de Disciplina (Ley 2445).
27. Impulsar la elección del Vocal representante de los padres en el CPE
28. Reclamar y exigir como CTA la elección del Vocal Gremial del IPROSS por voto directo de afiliados, para lograr que la obra social sea conducida por un cuerpo colegiado. Continuar exigiendo la revisión del sistema capitado, para que brinde más y mejores servicios a sus afiliadas/os.
29. Defender los derechos e ingresos de retiradas/os y/o jubiladas/os docentes, como así también profundizar las acciones con respecto a la plena vigencia del Decreto 538 y el efectivo cumplimiento del 82% móvil de la Ley 24016.
30. Promover la defensa de los derechos laborales de compañeras y compañeros que trabajan en la educación privada, impulsando la afiliación a nuestro sindicato.
31. Seguir desarrollando políticas de prevención en salud, seguridad y riesgos en la escuela en el marco del Departamento de Salud.
32. Llevar adelante un plan de obra integral desde Acción Social del Sindicato.
33. Continuar con el programa de refacciones, construcciones y adquisiciones a fin de preservar y aumentar el patrimonio de nuestra organización para fines sociales y gremiales.
34. Desarrollar planes turísticos para afiliados/as y especialmente para jubilados/as con los recursos de la organización y con otras entidades de base.
35. Continuar con la política de vivienda en función de la demanda habitacional de las/os compañeras/os afiliadas/os.
36. Continuar con la campaña en contra de la judicialización de la protesta social y promover la defensa de compañeras y compañeros docentes y demás trabajadoras/es procesadas/os por su participación en luchas sociales.
37. Continuar con las acciones tendientes a lograr mantener la memoria activa sobre los hechos acontecidos en nuestro país sobre: golpes de Estado, genocidio, asesinatos impunes, represión y cualquier otro tipo de acción de parte de los gobiernos o estructuras de poder.
38. Seguir impulsando acciones de rechazo a la minería contaminante y el saqueo de los recursos naturales.
39. Reafirmar nuestra adhesión a la solicitud de conformación de la “Comisión Tripartita de igualdad de trato” en el mundo del Trabajo, en la provincia de Río Negro
40. Incorporar la perspectiva de Género, que implica utilización del lenguaje no sexista en toda producción gremial: notas, documentos, afiches. Capacitación sistemática. Transversalización de los currículum en todos los niveles de enseñanza.

Política Gremial aprobada en el XXVI Congreso Ordinario, Sierra Colorada, 9/12/08